

Entre la combinación de las formas de lucha y la parapolítica

Por Teófilo Vásquez. Investigador del Cinep
violenciayestado@cinpe.org.co

El ascenso de la modernidad supone una actividad política totalmente separada de la violencia y de la acción económica orientada a los intereses privados; es decir, la acción política debería ser por definición el consenso pacífico y la búsqueda incesante del bien público y colectivo. Pero, al margen de qué tan cerca o lejos nos hallemos de semejante ideal, se debe constatar que el actual debate político en Colombia está atrapado en una disputa entre las “las izquierdas”, “las derechas” y el “centro”, que proclaman simultáneamente ser legítimas representantes de tal modernidad y se esfuerzan en tildar a sus contrarios como expresiones de poder que combinan los negocios, las armas y la política.

Así las cosas, si bien el pasado proceso electoral regional fue el menos violento de los últimos 10 años, según cifras del Fundación Seguridad y Democracia¹, esta situación contrasta con la intemperancia verbal del debate electoral, que estuvo marcado por cuál de las fuerzas políticas hacía más creíble, ante la sociedad, su reclamo por la anhelada modernidad política: de un lado, la izquierda, que por todos los medios posibles denunció las prácticas clientelistas, las grandes sumas de dinero en las campañas y, principalmente, la amenaza del fortalecimiento de la denominada “parapolítica”; de otro, la derecha, con Gobierno a bordo, que revivió la impugnación a una de las prácticas políticas más debatibles de las izquierdas, como lo es la denominada “combinación de las formas de lucha”.

Semejante debate se puede evidenciar y constatar en las palabras y las declaraciones que han hecho públicas quienes se han trenzado en sendas controversias a propósito de dos temas: la discusión jurídica sobre el delito político y el debate sobre la lucha armada y la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos o económicos.

La discusión jurídica

En este ámbito la discusión tiene como eje cuál de los dos grupos armados tiene mayores méritos para merecer el tratamiento jurídico de delincuentes políticos o sediciosos, en oposición al espurio de delincuentes comunes o terroristas.

El gobierno nacional y las derechas insisten, mediante todas las argucias imaginables, en dar tratamiento político a los grupos paramilitares. Fernando Londoño señaló en su columna del diario El Tiempo que “... los tales paramilitares se enfrentaron a la guerrilla dentro de esa ausencia total de poder legítimo, no para reivindicarlo sino para sustituirlo. Eso es política con (sic) todo lo detestable que se quiera”.²

El Gobierno argumenta que es una fórmula que permite darle viabilidad y sostenibilidad al proceso de negociación y DDR (Desarme, Desmovilización y

Reinserción) que se ha desarrollado con estas agrupaciones armadas durante los últimos 5 años, mientras que niega otorgarles un tratamiento semejante a los grupos guerrilleros. La anterior posición llevó al Gobierno a uno de los más sonados y duros enfrentamientos verbales con las altas cortes, que alcanzó su momento más arduo cuando Uribe indicó: "... si en la convicción de los magistrados de la Corte Suprema creen que la guerrilla comete delitos políticos y los paramilitares no, que a la guerrilla hay que darle ese tratamiento benigno y a los paramilitares hay que negárselos, ¡por Dios! que por el bien superior de país deponga sus convicciones y trabajemos objetivamente por el bien superior de país".³

Las izquierdas se ha empeñan en el ejercicio contrario. Uno de sus más connotados juristas, Carlos Gaviria, reclama: "... me sorprende que el Gobierno, que ha tenido tanto interés en que el delito político se acabe, porque considera que esos delitos deben ser considerados como delitos comunes, sin embargo, quiera preservarlo a toda costa, precisamente para imputárselo a quienes no han cometido delitos políticos que son los paramilitares: imputándoles el delito de sedición."⁴ El editorial de Voz fue más escueto y afirmó, en medio del debate entre Uribe y las Cortes: "Esto que pretende el Gobierno es el mundo al revés: negar carácter político a la insurgencia y al mismo tiempo convertir en políticos a los criminales del paramilitarismo".⁵

Posteriormente el debate jurídico enfrentó a Carlos Gaviria con el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. El primero señaló que "... el delito político es muy simple. La rebelión consiste en tomar las armas contra un régimen que se considera injusto con el objeto de perseguir un régimen justo".⁶ El Comisionado, en dirección contraria, respondió: "Esa teoría llevó al siglo veinte a la hecatombe (...) entonces, el delincuente político es incluso más culpable que quien asesina por otro tipo de razones, porque lo hacen con premeditación".⁷

Pero, al margen de la discusión sobre en qué orilla ideológica esté la "razón" y la "verdad", cabe insistir a unos y otros que la tan añorada modernidad política no se alcanzará únicamente por vía jurídica.

Violencia y política

El senador Gustavo Petro, quien decidió pelear el "centro" político, advirtió que en la Costa Caribe su agrupación debía ser tajante frente a la parapolítica y las mafias: "No vamos apoyar, ni en Valledupar, ni en el Cesar, ni en ninguna otra parte del país, mafias políticas (...) hay fuerzas políticas que tienen sus representantes en las cárceles, sindicatos de parapolítica, y en la medida que esas fuerzas estén detrás de esos candidatos, están en convivencia".⁸ Mientras que el ex senador Álvaro Araújo, uno de los encartados en el proceso de la parapolítica, se empeña en decir que tal escándalo no es sino una "reacción de la aristocracia bogotana" y manifiesta que es: "... una acción política contra el Caribe colombiano (...) aquí se ha secuestrado la clase dirigente del Caribe".⁹

En el Polo Democrático casi se produce un cisma a raíz de las declaraciones del senador Petro en las que hizo un llamado para que su partido fuese más claro frente a las Farc...

Posteriormente, el presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, y los ministros de Defensa y del Interior, se trenzaron en un agrio debate a raíz de un presunto

artículo de Gaviria contra el Presidente publicado en la página web de una ONG británica. El artículo afirmaba que Uribe "... es hijo de un mafioso y que creció con mafiosos".¹⁰ El ministro Santo manifestó: "Nos preguntamos si es una simple coincidencia el artículo de Carlos Gaviria con lo que dice el aviso de la ONG Justicia por Colombia, o será que están confabulados Carlos Gaviria y el Polo con ese tipo organizaciones".¹¹ El ministro del Interior fue más lejos y, en tono inapropiado para su investidura, afirmó: "(...) son una partida de mamertos, de izquierdistas que no les interesa sino denigrar del país" (El Colombiano, septiembre 26 de 2007, pág. 8a). Pero lo más grave en este incidente fue el hecho de que Carlos Gaviria nunca escribió el mencionado artículo.

Después de las elecciones, el tono del Presidente se tornó más conciliador...

Posteriormente fue el mismo Presidente quien prosiguió los embates contra el Polo Democrático y acusó a Carlos Gaviria y al director del semanario Voz –órgano del Partido Comunista- de mantener posiciones ambiguas: "Es un engaño a la opinión ciudadana invitar por un lado a la urnas y por otro estar en una especie de coqueteo con la guerrilla".¹² La respuesta del presidente de Polo no fue menos temeraria: "Que nos investiguen: a mí por nexos con la guerrillas y a Uribe por nexos con los paras, a ver quién sale mejor librado".¹³ Semejantes excesos verbales tuvieron como principal escenario la contienda electoral por la Alcaldía de Bogotá: el primer mandatario del país aprovechó al máximo la infortunada respuesta de Samuel Moreno sobre la validez de la compra de votos y la publicación en la página de Internet de Anncol -señalada como vocera de las Farc- de un artículo del semanario Voz donde se apoyaba a Moreno, y en una evidente demostración de sus simpatías por el candidato Peñalosa, advirtió desde Algarrobo, en el Magdalena: "Que no se equivoquen allá (...) eligiendo alcaldes respaldados por la guerrilla y que además compran votos".¹⁴ Después de las elecciones, el tono del Presidente se tornó más conciliador y no sólo avaló indirectamente la propuesta de construir el metro para la capital sino que llamó a la bancada uribista del Concejo a no realizar una oposición cerrada contra el nuevo alcalde.

El debate de la parapolítica y las FARC también ha implicado discusiones al interior de los partidos. En el partido de la U, la parapolítica mantiene divididos al grupo de los llamados "disidentes", compuesto por Gina Parody, Armando Benedetti y Martha Lucia Ramírez, que reclaman al jefe actual, Carlos Garcia Orjuela, por apoyar candidaturas que podrían tener relaciones con el paramilitarismo.

En el Polo Democrático casi se produce un cisma a raíz de las declaraciones del senador Petro en las que hizo un llamado para que su partido fuese más claro frente a las Farc: "... creo que para la opinión pública no es suficientemente clara nuestra posición respecto a las Farc. Pese a que en nuestros estatutos condenamos la violencia como forma de resolver los conflictos sociales y políticos del país, la sociedad colombiana no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las Farc"¹⁵. Estas declaraciones produjeron un fuerte cruce de palabras que involucró a Petro, Carlos Gaviria y al senador Jaime Dussan, y la crisis fue conjurada luego de una declaración conjunta en la que este partido criticó abiertamente a las Farc y condenó la violencia: "Nos oponemos una vez más a la violencia, al terrorismo y a la guerra. Reafirmamos nuestro apoyo a la solución política del conflicto armado. Condenamos el homicidio de los once diputados del departamento del Valle. Señalamos la responsabilidad de sus captores, las Farc, en su trágico final".¹⁶

En síntesis, es necesario señalar que semejantes acusaciones mutuas y forcejeos verbales no son el camino más expedito para llegar a la deseada modernidad política y contrastan con las pocas o nulas acciones del país a favor del acuerdo humanitario. No se trata de atarse al pasado, tal como lo hacen las Farc o los paramilitares, pero tampoco llegaremos al futuro mediante las palabras, ya que cabe recordarles a todos los que hemos citado que -parafraseando a León Trosky- la historia no sigue un línea recta a veces se desliza por las tortuosas callejuelas de la violencia políticaⁱ y, por obvio que parezca, ése es nuestro presente, el que precisamente se trata de superar. Querer hacerlo a través de tan enconado lenguaje es pretender arrojar al futuro de espaldas, es decir, mirando el pasado.

Referencias

-
- ¹ Fundación Seguridad y Democracia (2007, julio – septiembre), “Coyuntura de seguridad”, N° 18.
- ² El Tiempo (2007, 2 de agosto), Bogotá, pág. 23
- ³ Entrevista radial, 27 de julio, citada en El Nuevo Siglo (2007, 3 de agosto) pág. 10A
- ⁴ Voz (2007, 7 de noviembre), Bogotá, pág. 5
- ⁵ Voz (2007, 1 de agosto), Bogotá, pág. 7
- ⁶ El Colombiano (2007, 31 de octubre), Medellín, pág. 7a
- ⁷ Ibid.
- ⁸ El Nuevo Siglo (2007, 13 de septiembre), Bogotá, pág. A9
- ⁹ El Nuevo Siglo (2007, 7 de agosto), Bogotá, pág. A13
- ¹⁰ El Tiempo (2007, 25 de septiembre), Bogotá, pág. 1-5
- ¹¹ Ibid.
- ¹² El País (2007, 27 de octubre), Cali, pág. A7
- ¹³ Ibid.
- ¹⁴ El Tiempo (2007, 27 de octubre), Bogotá, pág. 1-2
- ¹⁵ Petro, G. (2007, 4 de julio), “Petro pide al Polo posiciones más enérgicas contra las Farc”, carta al Presidente del POLO, [en línea], disponible en: <http://www.polodemocratico.net/Petro-pide-al-Polo-posiciones-mas>
- ¹⁶ Comité Ejecutivo Nacional del POLO (2007, 19 de septiembre), Comunicado de prensa, Bogotá, [en línea], disponible en: <http://www.polodemocratico.net/El-Polo-Unido-y-fortalecido>

ⁱ En su libro “La revolución permanente” de 1930.